

Vim.

C.A. de Valparaíso

Valparaíso, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

**Visto:**

En estos autos RUC N° 2140317600-9, RIT N° T-301-2021, Rol IC N° 404-2023-LAB, don **Álvaro Gallegos Díaz**, abogado, en representación de la parte demandada de **Servicios de Seguridad Prosegur Regiones Limitada**, interpone recurso de nulidad en contra de la sentencia de 2 de mayo de 2023, pronunciada por don Eduardo Saldivia Saa, Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, en la que se acoge la denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido indirecto interpuesta por doña **Evelyn Alejandra Retamal López**, estableciéndose que la empresa y ex empleadora denunciada vulneró su derecho a la integridad física y psíquica y en consecuencia se le condena al pago de \$5.884.274.- por indemnización adicional de once meses de remuneraciones de la actora, según lo dispuesto en el artículo 489 inciso tercero del Código del Trabajo; \$534.934.- por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo; \$3.209.604.- por concepto de indemnización por años de servicios (seis años); y, \$2.567.683.- por concepto del recargo del 80% a la indemnización por años de servicios; con los reajustes e intereses que se señalan; y, se acoge la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral con ocasión de enfermedad profesional, declarándose que la empresa y ex empleadora deberá pagar a la actora la suma de \$4.000.000.- de indemnización por daño moral, con los reajustes, intereses y costas que se indican.

La causal de nulidad en que se funda el recurso es la contemplada en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del Tribunal inferior, solicitando la invalidación de la sentencia y la dictación de la correspondiente de reemplazo por la Corte de Apelaciones Santiago (*sic*), rechazando la denuncia de tutela laboral deducida en autos y se acoja la demanda subsidiaria de despido indirecto interpuesta por la actora, condenando a la demandada al pago de las prestaciones solicitadas, sin costas.

Habiéndose estimado admisible el recurso, se fijó audiencia para su vista, la que se llevó a efecto el 26 de julio de 2023, interviniendo por el mismo el abogado don Álvaro Gallegos Díaz y por la parte recurrida el abogado don Roberto Welsh Crespo, determinándose la dictación del fallo y su lectura dentro del término legal y, en consecuencia, con esta fecha se procede conforme a lo señalado.

**Con lo relacionado y considerando:**

**Primero:** Que, fundando la causal de la impugnación, la recurrente señala que la sentencia estableció, en base a los hechos asentados en el motivo décimo, que producto de las licencias e



informes médicos incorporados, existen al menos dos indicios de vulneración de la integridad física y psíquica de la trabajadora y que ello “fue producto de una deficiente organización empresarial por parte de la demandada, consistente ente otros, en largas y extenuantes jornadas de trabajo”, descartando que se hayan acreditado o aportado indicios de los actos de acoso y maltrato laboral denunciados, fundamento basal de la acción de tutela y que generó el despido indirecto. Precisa que lo indicado no es un hecho determinado en el fallo, que deba mantenerse inalterado, sino que con consecuencias jurídicas que provienen de los hechos y las justificaciones vertidas a ese respecto en la sentencia, para sustentar la decisión.

**Segundo:** Que, prosigue, cuando la sentencia concluye que se vulneró la integridad física y psíquica de la denunciante, producto de una deficiente organización empresarial, no se está asentando un hecho, sino que se hace un ejercicio dialéctico dirigido a subsumir la situación fáctica en una regla jurídica determinada, que en este caso es equivocada. El incumplimiento del deber de seguridad del artículo 184 del Código del Trabajo, no configura por sí solo la vulneración del derecho fundamental a la integridad física y psíquica; de lo contrario, cada vez que un trabajador sufre un accidente o enfermedad profesional, habría que sancionar al empleador por dicho concepto, aun cuando la enfermedad se haya producido por una deficiente organización empresarial expresada en extensas jornadas de trabajo.

**Tercero** Que, agrega, ni siquiera la parte denunciante planteó jurídicamente lo que se resolvió, ya que la vulneración que denuncia se basa en un largo historial de supuestos maltratos y actos abusivos de supervisores, superior jerárquico y otros trabajadores, lo que no resultó acreditado, ni siquiera como indicio. En el Derecho del Trabajo existen los derechos laborales propiamente tales, los derechos fundamentales específicos y los inespecíficos, que miran al trabajador en su calidad de persona y ciudadano. Los primeros están protegidos por la ley y si se excede la jornada de trabajo, el empleador incumple el derecho laboral propiamente tal, lo que también ocurre en materia de accidentes y enfermedades profesionales, donde la ley establece un deber de seguridad que debe cumplir el empleador, que es lo que debió concluirse en el fallo, esto es, infracción de los artículos 31 y 184 del Código del Trabajo, acogiendo la demanda subsidiaria de despido indirecto.

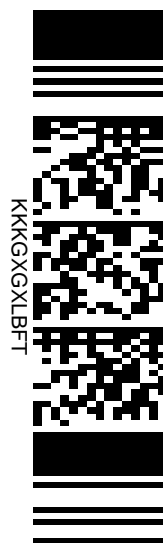
**Cuarto:** Explica que el ámbito que protege la acción de tutela laboral no mira a los derechos y deberes específicos laborales, sino que, al trabajador como persona y ciudadano, naciendo para proteger un área no cubierta por el Derecho del Trabajo. Puede existir un cúmulo de infracciones laborales y ius fundamentales, pero ello supone hechos acaecidos que excedan el incumplimiento de derechos laborales propiamente tales, los que fueron denunciados (actos abusivos, malos tratos y expresiones descomedidas y/o inadecuadas) y que no se acreditaron, ni siquiera indiciariamente, ante lo cual, la simple mala



organización de la empresa expresada en extensas jornadas de trabajo, no puede ser calificada como vulneración de derechos fundamentales, aunque sí, la infracción de los artículos 31 y 184 aludidos, que constituye un incumplimiento grave de obligaciones que impone el contrato al empleador y no una vulneración de la integridad física o psíquica de la actora, yerro de derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que de no haberse cometido, se habría rechazado la acción de tutela y acogido la subsidiaria de despido indirecto injustificado.

**Quinto:** Que, para discernir sobre la concurrencia de la causal de nulidad planteada, es indispensable considerar lo expuesto por en sentenciador en los motivos noveno y décimo del fallo, en cuanto a aquello que fue sometido a su decisión como fundamento de la acción de tutela laboral. En el basamento noveno, párrafo penúltimo, se expone que *del libelo se desprende que la parte denunciante alega que su empleadora ha vulnerado la garantía consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, al afectar su integridad física y psíquica debido a un importante exceso en la carga de trabajo, que implicaba largas jornadas de trabajo y una importante carga de estrés lo que provoco un trastorno mixto de ansiedad y depresión, parálisis facial, trastorno adaptativo y neurosis laboral, sumado a malos tratos directos de quien ejercía su jefatura como describió la carta de auto despido*; y, en los dos primeros párrafos del considerando décimo, se señala que *la denunciante fundó la vulneración sufrida, en diversos actos abusivos, tanto de parte de algunos supervisores y otros empelados, como de su superior jerárquico, estos malos tratos o expresiones descomedidas y inadecuadas no resultaron ser acreditados ni siquiera como indicios. De igual manera, fundó su vulneración, en la afectación directa a su integridad física y psíquica derivada de una mala distribución del trabajo, generándose a su respecto jornadas extenuantes que afectaron directamente su salud tanto física como psíquica, lo que sí logró acreditar.*

**Sexto:** Que de lo expuesto en el considerando precedente se desprende que no resulta efectivo lo que se da a entender en el recurso de nulidad, en cuanto a que la vulneración del derecho fundamental del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, haya sido fundada por la parte demandante, solo en los actos abusivos denunciados, malos tratos y expresiones descomedidas, perpetrados por supervisores, otros empleados y el superior jerárquico, lo que efectivamente, tal como ha dicho la recurrente, no resultó acreditado. Lo cierto es que la denunciante también basó la vulneración aludida, en el daño físico y psíquico que le produjo la mala distribución del trabajo por parte del empleador, generándose a su respecto jornadas extenuantes, lo que sí resultó probado. Por tanto, la mala distribución del trabajo que generó jornadas extenuantes que causaron un daño físico y psíquico a la trabajadora, constituye una proposición fáctica del



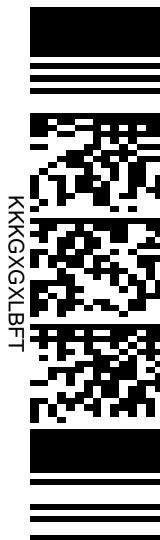
caso, justificada (en el propio motivo décimo) y asentada, que resulta inamovible para efectos de ponderar el motivo de invalidación intentado, que solo permite la alteración de la calificación jurídica de los hechos.

**Séptimo:** Que a continuación, también en el considerando décimo, el sentenciador equipara la mala distribución del trabajo alegada, probada y asentada, con una deficiente organización empresarial, lo que no implica dar una calificación jurídica determinada, sino que es una precisión o especificación del antecedente fáctico acreditado. En efecto, lo relevante es que el daño físico y psíquico fue causado directamente por una mala distribución del trabajo y eso no es otra cosa que una deficiente organización empresarial, por lo que en todo momento se trata del mismo hecho, que claramente constituye uno de los posibles actos ocurridos en el contexto de la relación laboral, a que alude el artículo 485 inciso primero del Código del Trabajo y no un ejercicio dialéctico del Juez, dirigido a subsumir la situación fáctica en una equivocada regla jurídica determinada, como sostiene el recurrente.

**Octavo:** Que, en consecuencia, establecido el hecho señalado y comprobado que generó directamente un daño físico y psíquico a la trabajadora, en los términos explicados en el fallo, resulta acertada la calificación jurídica realizada, esto es, de acto vulnerador del derecho fundamental del artículo 19 N° 1 de la Constitución, de la trabajadora, sin que sea necesario ni obligatorio establecer las infracciones a los artículos 31 y 184 del Código del Trabajo como motivo de incumplimiento grave por parte del empleador de las obligación impuestas por el contrato, generándose una causal de despido indirecto injustificado, que es lo que pretende la parte recurrente.

**Noveno:** Que, además, el acto de distribuir inadecuadamente el trabajo permitiendo jornadas extenuantes o una deficiente organización empresarial en ese sentido, no constituye exactamente el mismo supuesto fáctico de los artículos 31 y 184 del Código del Trabajo, que se refieren, el primero, solo al pacto de horas extraordinarias en faenas que por su naturaleza no perjudiquen la salud del trabajador y el segundo, a todas las medidas necesarias que debe tomar el empleador para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. En el primer caso se requiere acreditar y calificar la naturaleza de la faena posiblemente dañosa y en el segundo, se trata de una regla tan amplia, que, en teoría, cualquier acto, directo o indirecto del empleador que dañe la salud del trabajador podría constituir tal infracción, desplazando la vulneración de derechos fundamentales de la tutela laboral, lo que no resulta razonable. Por lo mismo, mutar la calificación jurídica del hecho en el sentido que se pretende, implica transgredir los límites de la causal de nulidad invocada.

**Décimo:** Que aun admitiendo hipotéticamente que el hecho probado pueda ser también constitutivo de las infracciones laborales señaladas, la propia recurrente admite en el recurso que puede existir



un cúmulo de infracciones laborales y ius fundamentales y que ello supone hechos acaecidos más allá del incumplimiento de derechos laborales propiamente tales, que en este caso serían los actos abusivos y malos tratos denunciados, no acreditados. Sin embargo, tal situación -como se adelantó en el motivo sexto del presente fallo-, es solo uno de los fundamentos de la vulneración del artículo 19 N° 1 de la Constitución, alegada por la actora, ya que aparte, se invocó la mala distribución del trabajo con jornadas laborales extenuantes, como razón de la misma conculcación, por lo que no es aceptable admitir que al no ser probados los actos abusivos, lo demás no tenga la aptitud para ser un acto lesión de derechos fundamentales por sí mismo, sin perjuicio, que además, si resulta acreditado, pueda constituir, eventualmente, infracciones laborales propiamente tales. En este caso, como consta en el motivo décimo de la sentencia, la trabajadora tenía evidentes antecedentes de enfermedad profesional, vinculada al puesto de trabajo, sobrecarga laboral y disfunción en el diseño de tareas y/o puesto de trabajo/sobrecarga (sic), por lo que concurre el *plus* que exige la parte recurrente para el cúmulo señalado, esto es, los hechos exceden el mero incumplimiento de derechos laborales propiamente tales.

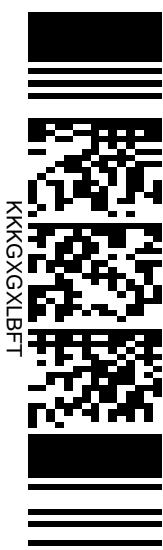
**Undécimo:** Que, en consecuencia, por las razones expuestas, no resulta necesario alterar la calificación jurídica de los hechos, estimando que constituyen una mera infracción de los artículos 31 y 184 del Código del Trabajo y no una vulneración directa del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, prevenida en el artículo 485 del Código del trabajo, como acertadamente se determinó en la sentencia, por lo que el recurso de nulidad será rechazado.

Por estas consideraciones y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 476 y siguientes del Código del Trabajo, **se rechaza**, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada de Servicios de Seguridad Prosegur Regiones Limitada, en contra de la sentencia de dos de mayo de dos mil veintitrés, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, la que **no es nula**.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, comuníquese al Tribunal de origen.

Redacción del Ministro Suplente Sr. Aravena.  
N°Laboral - Cobranza-404-2023.





KKKGXLBFT

Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Pablo Droppelmann C., Rafael Francisco Corvalan P. y Ministro Suplente Leonardo Aravena R. Valparaiso, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.

En Valparaiso, a treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

